REPÚBLICA DE COLOMBIA
RAMA JUDICIAL DEL PODER PÚBLICO
JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE
POPAYÁN

Febrero, Diecisiete (17) de dos mil diecisiete (2017)

Sentencia No. 32

Expediente: 19001-33-33-006-2014-00152-00
Demandante: YAMILETH BALANTA LUCUMÍ
Demandado: NACION – MINDEFENSA-POLICIA NACIONAL
Medio de Control: REPARACION DIRECTA

I.- ANTECEDENTES

Procede el Despacho a dictar sentencia de primera instancia dentro del proceso de Reparación Directa instaurado por la señora YAMILETH BALANTA LUCUMÍ, CARMEN TULIA LUCIMI CHAPURRI, JOSE ARLEX BALANTA LUCUMÍ, JAIRO ALONSO BALANTA LUCUMÍ, quien actúa en nombre propio y representación del menor JHELEN BALANTA SOLARTE¹, FAYZULY BALANTA LUCUMÍ, Y ALDEMAR LUCUMÍ CHARRUPI, a través de apoderado judicial tendiente a obtener el reconocimiento y pago de la indemnización de perjuicios morales y materiales, con ocasión de las lesiones padecidas por YAMILETH BALANTA LUCUMÍ, con ocasión del atentado en contra de la Estación de Policía de Suarez Cauca, en hechos ocurridos el 5 de noviembre de 2013.

En el proceso intervinieron las siguientes

1.1.- PARTES:

Demandantes:

YAMILETH BALANTA LUCUMÍ, CARMEN TULIA LUCIMI CHAPURRI, JOSE ARLEX BALANTA LUCUMÍ, JAIRO ALONSO BALANTA LUCUMÍ, quien actúa en nombre propio y representación del menor JHELEN BALANTA SOLARTE², FAYZULY BALANTA LUCUMÍ, Y ALDEMAR LUCUMÍ CHARRUPI.

Demandado: NACION – MINISTERIO DE DEFENSA- POLICIA NACIONAL
MUNICIPIO DE SUAREZ – CAUCA

¹ Folio 14 del cuaderno principal.

² Folio 14 del cuaderno principal.

Expediente: 19001-33-33-006-2014-00152-00
Demandante: YAMITETH BALANTA LUCUMÍ Y OTROS
Demandado: NACION – MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA NACIONAL Y OTRO
Medio de Control: REPARACION DIRECTA

1.2.- DECLARACIONES Y CONDENAS:

1.-) Declárese a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional y al Municipio de Suarez Cauca administrativamente responsable de todos los daños y perjuicios que se les ocasionaron a la parte actora por las lesiones padecidas por YAMILETH BALANTA LUCUMÍ, con ocasión del atentado en contra de la Estación de Policía de Suarez Cauca, en hechos ocurridos el 5 de noviembre de 2013.

Como consecuencia de la anterior declaración condénese a la Nación-Ministerio de Defensa-Policía Nacional, a pagar los perjuicios a los actores así:

1.- Por concepto de perjuicios materiales:

- Daño emergente:

Páguese la suma de dos millones de pesos por concepto de gastos en medicamentos utilizados para recuperación del estado de salud de la lesionada

- Lucro cesante:

Teniendo en cuenta la vida probable de la víctima y el ingreso mensual percibido más un 30% por concepto de prestaciones sociales e intereses compensatorios, se solicita la suma de sesenta millones de pesos.

2.- Por concepto de perjuicios morales se solicita a favor de cada uno de los demandantes el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento del pago, para la señora Yamileth Balanta y Carmen Tulia Balanta Chapurri; la suma de a noventa (90) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento del pago para José Arlex Jairo Alonso Balanta Lucumí y Aldemar Lucumí Chapurri; la suma de a ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento del pago para Jelehn Balanta Solarte y Fayzuly Balanta Lucumí.

3.- Por el daño a la salud, la suma de 300 salarios mínimos legales mensuales vigentes; Por el daño a la recreación y aprovechamiento del tiempo libre la suma de 200 salarios mínimos legales mensuales; daño al proyecto de vida, la suma de 90 salarios mínimos legales

Expediente: 19001-33-33-006-2014-00152-00
Demandante: YAMITETH BALANTA LUCUMÍ Y OTROS
Demandado: NACION – MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA NACIONAL Y OTRO
Medio de Control: REPARACION DIRECTA

mensuales. Así mismo deprecia medidas reparatorias, consistentes en asistencia clínica necesaria para la superación de las secuelas que dejó el suceso. Finalmente, solicita el pago de los intereses moratorios desde la fecha de ejecutoria del fallo de las sumas reconocidas. Así mismo se condene a la entidad demandada al pago de costas y agencias en derecho.

1.3.- HECHOS

Los hechos relacionados por la parte actora se sintetizan de la siguiente manera:

Luego de señalar las relaciones familiares y de parentesco que une a la parte actora, señala que la señora Yamileth Balanta Lucumí desde aproximadamente ocho años ejercía labores varias de manera independiente en la Estación de Policía del Municipio de Suarez Cauca.

Indica que el 5 de noviembre de 2013, en horas de la mañana la señora Yamileth Balanta Lucumí se encontraba aseando la parte externa de la Estación de Policía de Suarez Cauca, cuando escuchó una fuerte explosión, refugiándose en una casa de habitación contigua al complejo policial.

Seguido al estallido se presentó un enfrentamiento entre miembros de la Policía Nacional e insurgentes, resultando herida la señora Yamileth Balanta Lucumí, fue posteriormente trasladada a la ESE Norte siendo atendida en razón a las múltiples heridas en su cuerpo y hospitalizada hasta el 14 del mismo mes y año.

Alude que la Joven no se ha recuperado satisfactoriamente de la lesiones a pesar de los tratamientos recibidos, dado que persiste el dolor y limitación en el movimiento de su miembro inferior izquierdo, situación que no le permite desarrollar sus actividades diarias sociales y recreativas.

Alude que desde hace décadas los grupos al margen de la Ley hacen presencia en el Municipio de Suarez Cauca, y en atención a ello la entidad territorial ha permitido la construcción de la estación de policía en medio del área urbana y sector residencial del casco municipal lo que hace muy vulnerable a la población civil teniendo en cuenta los hostigamientos de que es objeto la fuerza pública.

II.- ACTUACIONES PROCESALES

Expediente: 19001-33-33-006-2014-00152-00
Demandante: YAMITETH BALANTA LUCUMÍ Y OTROS
Demandado: NACION – MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA NACIONAL Y OTRO
Medio de Control: REPARACION DIRECTA

- La demanda fue presentada el día nueve (9) de abril de dos mil catorce (2013)³, mediante acta individual de reparto de la misma fecha, le correspondió a este Despacho conocer del presente proceso, siendo radicada en este Despacho judicial el día diez (10) del mismo mes y año⁴.
- Mediante providencia del veintiuno (21) de mayo de dos mil catorce (2014)⁵ se dispuso admitir la demanda.
- Las entidades demandadas fueron notificadas en forma electrónica el día veintiocho (28) de julio de dos mil catorce (2014)
- La demanda fue contestada el día veintiocho (28) de noviembre de dos mil catorce (2014) por parte de la Policía Nacional y el 20 de enero de 2015, por el Municipio de Suarez Cauca⁶
- El día doce (12) de marzo (2014), se fijó en lista el traslado de las excepciones formuladas en termino hábil.
- La audiencia inicial respectiva se celebró el día cuatro (04) de agosto de agosto de dos mil quince 2015, según acta No. 263
- Los días 24 de noviembre de 2015; 12 de abril de 2016 se celebró la respectiva audiencia de pruebas, en esta última diligencia se prescindió de la audiencia de alegaciones y Juzgamiento y se concedió a las partes el término de 10 días para presentar alegatos de conclusión.

2.1.-CONTESTACIÓN DE LA DEMANDA

La NACION – MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA NACIONAL, mediante apoderado judicial, contesta la demanda en los siguientes términos:

Se opone a todas y cada una de las pretensiones de la demanda, al considerar que no puede atribuírsele responsabilidad administrativa por cuanto los ataques perpetrados por grupos subversivos de las FARC tienen el carácter de ser indiscriminados contra la población civil y resultan imprevisibles para las autoridades públicas a menos que se produzcan amenazas previas que permitan adoptar oportunamente medidas de protección.

³ Folio 119 del cuaderno principal.

⁴ Folio 121 del cuaderno principal.

⁵ Folio 130 del cuaderno principal.

⁶ Folio 135 y ss ; 160 y ss del cuaderno principal

Expediente: 19001-33-33-006-2014-00152-00
Demandante: YAMITETH BALANTA LUCUMÍ Y OTROS
Demandado: NACION – MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA NACIONAL Y OTRO
Medio de Control: REPARACION DIRECTA

Propuso las siguientes excepciones de fondo:

- *EL HECHO DE UN TERCERO AJENO A LA NACIÓN-POLICÍA NACIONAL: Alega que si bien es cierto se alega la ocurrencia de un fenómeno delictivo consistente en un ataque contra la sociedad, no se ha demostrado la responsabilidad de la entidad o la falla de la misma, dado que no se ha demostrado que el acto fuera previsible.*

- *ATAQUE INDISCRIMINADO CONTRA LA POBLACION CIVIL: el ataque por atentado terrorista, constituye un hecho que constituye fuerza mayor, dado que fue irresistible e imprevisible. Así las cosas no pueden pensarse que el Estado esté obligado a responder por los perjuicios causados a los ciudadanos como consecuencia de la realización de cualquier delito.*

2.2. ALEGATOS DE CONCLUSION

Mediante providencia dictada durante la continuación de la audiencia de pruebas celebrada el doce (12) de abril de dos mil dieciséis (2016), se corrió traslado para alegar por diez (10) días (fls.285 y ss), término durante el cual únicamente se pronunció el apoderado de la Policía Nacional en los siguientes términos:

✓ Parte demandada-Policía Nacional

En su oportunidad procesal el apoderado de la parte accionada mediante escrito de fecha veintitrés (23) de febrero de dos mil dieciséis (2016) presenta alegatos de conclusión en los siguientes términos:

Señala que no se aporta al plenario prueba que acredite la actividad laboral que realizaba la señora Balata Lucumí en el momento de los hechos, ni mucho menos el valor de los ingresos.

Alega que en la demanda se sostiene que la señora Yamileth Balanta Lucumí resultó herida el día de los hechos sin embargo la historia clínica indica que la demandante acudió a la ESE Norte el día 6 de noviembre, registro que desmiente el dicho de declarante Reinela García Juanillo, cuando dijo que vió a la lesionada trasladándose el día de los hechos al Hospital.

Frente a la gravedad de las heridas se tiene que se presentó un diagnóstico de evolución satisfactoria sin signos de infección y donde

Expediente: 19001-33-33-006-2014-00152-00
Demandante: YAMITETH BALANTA LUCUMÍ Y OTROS
Demandado: NACION – MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA NACIONAL Y OTRO
Medio de Control: REPARACION DIRECTA

la demandante aduce sentirse bien reportándose únicamente la incapacidad medica por tres días a partir del 14 de noviembre fecha en la cual se produjo su egreso del Hospital.

Echa de menos la valoración de la Junta de calificación de Invalidez a efecto de determinar la supuesta discapacidad que dice padecer la demandante y que pudiese generar un lucro cesante, como quiera que la prueba testimonial refiere que la lesionada días después retomó sus actividades laborales.

En relación con el daño de tipo inmaterial tales como el daño a la salud, a su juicio es indispensable conocer la disminución de la capacidad laboral de la señora Yamileth. Adicionalmente considera que lo solicitado por daño a la salud es exagerado de conformidad con los topes establecidos por el Consejo de Estado; además manifiesta que el derecho a la recreación y aprovechamiento del tiempo libre, no se tiene cabida dentro de la clase de perjuicio inmaterial que reconoce el Consejo de Estado.

Respecto de los perjuicios morales dice que no existe prueba en el plenario que los acredite.

Insiste en que no se acreditaron los presupuestos que conllevan a declarar la responsabilidad extracontractual del estado, dado que no se demostró el daño sufrido por la demandante, ni la existencia de un posible perjuicio, así como una posible actuación u omisión de la Policía Nacional por lo tanto solicita negar las súplicas de la demanda. Por último reitera el medio exceptivo del hecho de un tercero.

El Municipio de Suarez Cauca y el Ministerio público no se pronunciaron.

III. CONSIDERACIONES

3.1. La competencia

Por la naturaleza de la acción, la fecha de presentación de la demanda y el lugar de los hechos, el Juzgado es competente para conocer de este asunto en **PRIMERA INSTANCIA** conforme a lo previsto en el artículo 140 de la Ley 1437 de 2011.

Expediente: 19001-33-33-006-2014-00152-00
Demandante: YAMITETH BALANTA LUCUMÍ Y OTROS
Demandado: NACION – MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA NACIONAL Y OTRO
Medio de Control: REPARACION DIRECTA

3.2.- Caducidad de la acción:

La responsabilidad endilgada a la Administración corresponde a las circunstancias acaecidas el día cinco (05) de noviembre de 2013, por su parte, la demanda se presentó el día nueve (9) de abril o de dos mil catorce (2014) –Fl. 119; es decir, la demanda se presentó dentro del término de caducidad de la acción legalmente previsto en el artículo 164 numeral 2 literal i) de la Ley 1437 de 2011. En consecuencia, es dable concluir que el medio de control instaurado no se encuentra afectado de caducidad.

3.3.- Cuestión Previa.

Mediante memorial radicado el 12 de marzo de 2015⁷, los señores Yamileth Balanta Lucumí, Carmen Tulia Lucumí, José Arlex Balanta Lucumí, Jairo Alonso Balanta Fayzuly Balanta Lucumí y Tulio Alberto Lucumí, manifestaron que revocaron el poder que otorgaron al abogado Henry Byron Ibáñez, como apoderado principal y al abogado Fernando Yepes Gómez como sustituto.

Indican que dieron poder al abogado AMADEO CERON CHICANGANA, para tramitar el mismo asunto que se lleva en el Juzgado Cuarto Administrativo del Circuito de Popayán, en consecuencia solicitan dar por terminado el proceso dado que seguirán adelante con el trámite del mismo proceso que cursa en el Juzgado Homologo.

Al respecto mediante auto del 27 abril de 2015, se aceptó la revocatoria del poder y se requirió a la parte actora para que constituyera nuevo apoderado dado que la revocación del poder no es una de las causales de terminación del proceso.

Mediante auto del 24 de julio de 2015⁸ se aclaró que dado que el demandante ALDEMAR LUCUMÍ CAHPURRI no había revocado el poder, los abogados Henry Byron Ibáñez y Fernando Yepes Gómez, continuarían fungiendo como su apoderado principal y sustituto respectivamente.

Tal como se advirtió en la providencia de abril de 2015, la revocatoria del poder no es causal para dar por terminado el proceso, así como tampoco la solicitud de finiquitar el mismo se puede entender como un desistimiento de las pensiones pues éste debe ser expreso

⁷ Folio 244 del cuaderno principal 2.

⁸ Folio 255

Expediente: 19001-33-33-006-2014-00152-00
Demandante: YAMITETH BALANTA LUCUMÍ Y OTROS
Demandado: NACION – MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA NACIONAL Y OTRO
Medio de Control: REPARACION DIRECTA

teniendo en cuenta las consecuencias previstas en el ordenamiento procesal.

Así las cosas, considera el Despacho que nada le impide pronunciarse de fondo respecto de las pretensiones de la parte demandante, que a voces del auto admisorio únicamente son: Yamileth Balanta Lucumí, Carmen Tulia Lucumí Chapurri, José Arlex, Fayzuli y Jairo Alonso Balanta Lucumí, este último en nombre propio y representación de Jhelen Balanta Solarte y Aldemar Lucumí Chapurri.

3.4.- Problema jurídico principal:

El problema jurídico a resolver en el presente asunto, se centra en determinar si a LA NACION MINISTERIO DE DEFENSA POLICIA NACIONAL y el Municipio de Suarez le son imputable los perjuicios que los demandantes afirman les fue ocasionados en razón a la lesiones sufridas por la señora Yamileth Balanta Lucumí en hechos desarrollados el 5 de noviembre de 2013.

Como problema jurídico asociado, en el evento de prosperar las pretensiones de la demanda habrá de dilucidarse si se encuentra válidamente acreditada la cuantía o monto de los perjuicios solicitados.

3.4- Tesis:

De las pruebas recaudadas en el expediente, se concluye que en efecto el ataque se dirigió en contra de la estación de Policía del Municipio de Suarez Cauca , como objetivo militar de los grupos guerrilleros al margen de la Ley y no en forma indiscriminada como lo sugiere la apoderada de la entidad accionada, como quiera que emerge evidente, que el hostigamiento por parte de grupos al margen de la Ley se encaminó en contra de la Estación de Policía, causando las lesiones a la señora Yamileth Balanta Lucumí.

En este orden, se hace necesario reparar los daños causados a la víctima en razón al daño especial, en la medida que padeció los efectos de los ataques armados que los grupos guerrilleros dirigen contra los bienes e instalaciones que sirven como medio para el cumplimiento de los deberes y el desarrollo de las actividades estales.

Expediente: 19001-33-33-006-2014-00152-00
Demandante: YAMITETH BALANTA LUCUMÍ Y OTROS
Demandado: NACION – MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA NACIONAL Y OTRO
Medio de Control: REPARACION DIRECTA

Al tenor de la jurisprudencia se considera que los atentados cometidos por la guerrilla contra un "objeto claramente identificable como Estado" en el marco del conflicto interno armado, en el caso que nos ocupa la estación de policía de Municipio de Suarez es dable imputarle al Estado a título de daño especial no porque estos bienes e instalaciones puedan ser considerados peligrosos en sí mismos, sino porque se ha desarrollado en cumplimiento de un encargo o mandato legal y en beneficio del interés general, pero con ella se ha producido un perjuicio concreto, grave y especial a un particular o a un grupo de particulares, afectando su patrimonio en razón a que son blanco de continuos y violentos ataques por parte de la guerrilla que los considera objetivos militares.

4.- Fundamentos de la sentencia.

En el caso sub judice, la parte actora solicita que se declare a la NACIÓN-MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA NACIONAL y al Municipio de Suarez Cauca, administrativa y patrimonialmente responsable por los perjuicios materiales e inmateriales, ocasionados a los demandantes con motivo de lesiones padecidas por la señora Yamileth Balta Lucumí por el atentado dirigido contra la Estación de Policía del Municipio de Suarez el día 5 de noviembre de 2013, habida consideración que se presentó un enfrentamiento entre la fuerza pública y grupos insurgentes. Adicionalmente se achaca responsabilidad al ente territorial por cuanto ha permitido o tolerado la instalación de la estación Policial, lo que a su juicio hace más vulnerable a la comunidad civil, en el marco de los constantes hostigamientos que padece la fuerza pública por parte de grupos guerrilleros que han hecho presencia histórica en la región.

- De lo probado en el proceso:

El daño.-

La historia clínica emanada de la Empresa Social del estado ESE1 a nombre de Yamileth Balanta Lucumí, registra:

Datos de admisión⁹ Fecha 05 de noviembre de 2013

Paciente adulto joven víctima de atentado terrorista quien presenta herida por esquirla en pierna izquierda y brazo izquierdo en el

⁹ Folio 73 y ss del cuaderno principal 2.

Expediente: 19001-33-33-006-2014-00152-00
Demandante: YAMITETH BALANTA LUCUMÍ Y OTROS
Demandado: NACION – MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA NACIONAL Y OTRO
Medio de Control: REPARACION DIRECTA

momento sin signos duros o blandos de lesión vascular (...) se remite para valoración de cirugía general.

Fecha atención de consulta 06 de noviembre de 2013, Hora 9:54 am.¹⁰

Ingresa paciente de sexo femenino de 31 años de edad al servicio de hospitalización procedente de servicio de urgencias, paciente que fue remitida a la clínica la Estancia en Popayán por sufrir heridas ocasionadas por esquirlas en atentado terrorista, pero fue contravenida para manejo con antibiótico por 10 días corresponde a nivel 1 consiente orientada en tiempo lugar y persona con diagnóstico de herida del brazo se observa en miembro superior e inferior izquierdo gasas y esparadrapo cubriendo heridas ...”

Nota de atención del servicio de hospitalización 10:28 a.m.

Paciente quien el día de ayer en medio del atentado a la estación de policía Recibe herida por esquirlas en brazo izquierdo y pierna izquierda fue valorada por cirujano en clínica la estancia de Popayán donde contra remiten con indicación de tratamiento ATB y curaciones diarias

Jueves 14 de noviembre de 2013.

Paciente que el día de hoy completa 8 días con tratamiento antibiótico, manifiesta sentirse bien, actualmente paciente en buenas condiciones generales afebril sin signos de dificultad respiratoria tolerancia o vía oral. (...)

Extremidades móviles no edema, llenado menor de dos segundos, se evidencia heridas por onda explosiva sin signos de infección local en brazo y pierna izquierda. SNC conservado, herida en brazo herida en pierna, secundaria a onda explosiva.

Plan: Egreso por mejoría de cuadro clínica con evaluación satisfactoria continuar seguimiento con cirugía general, formula y recomendaciones, continua con antibiótico oral, valoración por cirugía general para continuar manejo.

¹⁰ Folio 19 y ss del cuaderno principal 1.

Expediente: 19001-33-33-006-2014-00152-00
Demandante: YAMITETH BALANTA LUCUMÍ Y OTROS
Demandado: NACION – MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA NACIONAL Y OTRO
Medio de Control: REPARACION DIRECTA

4.1- El hecho dañoso – Daño antijurídico

El artículo 90 de la Constitución Política establece la cláusula general de la responsabilidad extracontractual del Estado consistente en un "DAÑO ANTIJURÍDICO" causado a un administrado e imputable a la administración pública, por la acción u omisión de un deber normativo. Así lo ha reiterado la Corte Constitucional sentencias C-619 de 2002; C-918 de 2002: esta responsabilidad se configura "siempre y cuando: i) ocurra un daño antijurídico o lesión, ii) éste sea imputable a la acción u omisión de un ente público".

A continuación se procederá a verificar la existencia de un daño antijurídico como requisito *sine qua non* de la responsabilidad estatal, necesaria para determinar si dicho daño es imputable a la entidad estatal demandada por cualquiera de los títulos de imputación del daño definidos por la Jurisprudencia del Consejo de Estado.

El daño antijurídico, entendido como la lesión a un derecho o bien jurídico o interés legítimo que los demandantes no están obligados a soportar. En otros términos, aquel que se produce a pesar de que "el ordenamiento jurídico no le ha impuesto a la víctima el deber de soportarlo, es decir, que el daño carece de causales de justificación"¹¹.

En el caso particular, el daño lo constituyen las lesiones en la humedad de la señora Yamileth Balanta Lucumí. Así las cosas a efecto de establecer si el daño se torna en antijurídico es del caso valorar las pruebas que fueron debidamente aportadas al proceso:

A folio 145 del cuaderno principal 1 obra el oficio No. 0680/DISPO DOS-ESTPO 29.11 del 5 de noviembre de 2013, suscrito por el Comandante de la Estación de Policía Suarez Cauca, mediante el cual presenta al Subcomandante del Departamento de Policía el informe ejecutivo de ferias y fiestas de Suarez Cauca en cuyo parte se registra:

"Día 5 de noviembre de 2013, siendo las 6:40.a.m. se presentó hostigamiento contra las instalaciones policiales con ráfagas de fusil, granadas epg, granadas de mano, y granadas hechizas por parte de la columna móvil Miller Perdomo de las farc, se activó el plan defensa

¹¹ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo. Sección Tercera. Sentencias de 11 de noviembre de 1999. C.P. Alíer Eduardo Hernández Enríquez. Exp. 11499 y del 27 de enero de 2000. C.P. Alíer Eduardo Hernández Enríquez. Exp. 10867

Expediente: 19001-33-33-006-2014-00152-00
Demandante: YAMITETH BALANTA LUCUMÍ Y OTROS
Demandado: NACION – MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA NACIONAL Y OTRO
Medio de Control: REPARACION DIRECTA

logrando repeler el ataque por parte del personal policial durante la reacción resultó lesionado el auxiliar de policía VARGAS MOSQUERA ARLENSON, C.C. 1077465561 de Quibdó Choco(...) y la señora YAMILET BALANTA LUCUMÍ, C.C 34.503.626 de Suarez 28 años de edad natural de Suarez nacida el 03 de noviembre de 1985, soltera de oficios varios, bachiller residente en el barrio pueblo nuevo, teléfono 3128421022 hija de Carmen y Jorge quien presenta herida por esquirla en el miembro inferior izquierdo a la altura del músculo gastronemio y herida por esquirla en el brazo izquierdo los cuales fueron trasladados al hospital local para que les prestaran a atención medica necesaria...”

Obra el informe de riesgos No. 001 -12-AI de la Defensoría del Pueblo que contextualiza y caracteriza el nivel del riesgo de violación de derechos humanos de la población del municipio de Suarez Cauca ante la presencia de grupos subversivos y en especial las FARC.

El citado documento señala: “ (...) Así mismo se constata que las autoridades del Municipio de Suarez y Morales han expresado su preocupación por los anuncios y amenazas de las FARC de atentar contra las Estaciones de Policía o guarniciones militares ubicadas en cabeceras Municipales, que podrían afectar a la población civil que reside en el entorno de de esas instalaciones como persona que diariamente transitan por el área urbana”.

En acta No. 11 del 27 de noviembre de 27 de 2013, del Consejo de Seguridad se plasmó por parte del Juez Municipal que desde hace mucho tiempo viene tratándose el tema sobre los constantes rumores desde hace ya tiempo atrás que planean poner un carro bomba en la estación de policía, el objetivo de ellos es tumbarla como sea, y considera que es tiempo de tomar medidas preventivas.

4.2- Del Régimen de responsabilidad:

Conforme a los actuales pronunciamientos del H. Consejo de Estado, con base en consideraciones de la Sala Plena de dicha Corporación, no es factible privilegiar ningún régimen de responsabilidad estatal, o un título jurídico de imputación por excelencia, pese a las analogías fácticas que puedan presentarse entre uno y otro proceso, ya que éste puede variar según circunstancias particulares o parámetros y criterios jurídicos del funcionario judicial:

Expediente: 19001-33-33-006-2014-00152-00
Demandante: YAMITETH BALANTA LUCUMÍ Y OTROS
Demandado: NACION – MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA NACIONAL Y OTRO
Medio de Control: REPARACION DIRECTA

"En cuanto a la imputabilidad del daño a la administración, es pertinente poner de presente que en reciente pronunciamiento, la Sección Tercera del Consejo de Estado en pleno señaló que, así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, tampoco podía la jurisprudencia establecer un único título de imputación a aplicar a eventos que guarden ciertas semejanzas fácticas entre sí, ya que éste puede variar en consideración a las circunstancias particulares acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación:

*En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la **Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar.** Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a diversos "títulos de imputación" como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.*

En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta sentencia¹²[1].

20. Así las cosas, de conformidad con la jurisprudencia citada, no todos los casos en los que se discuta la responsabilidad del Estado por daños derivados de un supuesto de hecho que guarde semejanzas tengan que resolverse de la misma forma pues, se insiste, el juez puede –en cada caso concreto– válidamente considerar que existen razones tanto jurídicas

¹²Consejo de Estado, S.C.A., Sección Tercera, Sala Plena, sentencia de 19 de abril de 2012, exp. 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en la sentencia de 23 de agosto de 2012, exp. 23219, C.P. Hernán Andrade Rincón.

Expediente: 19001-33-33-006-2014-00152-00
Demandante: YAMITETH BALANTA LUCUMÍ Y OTROS
Demandado: NACION – MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA NACIONAL Y OTRO
Medio de Control: REPARACION DIRECTA

*como fácticas que justifican la aplicación de un título o una motivación diferente.*¹³

Lo anterior, no es óbice para que se realice en el presente evento un recuento de los criterios jurisprudenciales que se han adoptado por la Alta Corporación de lo Contencioso Administrativo, en materia de actos de terrorismo dirigidos contra bienes o instalaciones del Estado.

Sea lo primero destacar que la jurisprudencia contenciosa administrativa ha definido en relación con el acto terrorista, lo siguiente:

*"Encuentra su ratio o fundamento en la intención de dañar a la sociedad en conjunto. En otras palabras, los daños materiales frutos del actuar terrorista deben ser tomados como un elemento accidental en la determinación de los efectos jurídicos, por tanto, no esencial (sic) al régimen de responsabilidad que establezca el Estado para la reparación de este tipo de actos. Al respecto, esta corporación ha manifestado **que es socavar las instituciones, lo que se explica por la selección del personaje contra el cual se ejecutó. El fenómeno violento se dirigió, pues, contra la organización estatal con el fin de destruirla, o a la búsqueda de concesiones importantes.** Admite la Sala que no se ha encontrado un concepto unívoco de terrorismo, sin embargo, es común a las distintas definiciones el elemento que ahora se resalta: el ataque a la sociedad en conjunto, que subyace como connatural al atentado terrorista."*¹⁴ Subrayado y negrillas fuera de texto.

Es dable destacar que en asuntos como el presente, la jurisprudencia no ha sido pacífica, así, los regímenes de responsabilidad estatal se han analizado bajo la tesis clásica de la causal eximente de responsabilidad del hecho de un tercero, otorgando la connotación de la fuerza mayor, al daño sufrido por particulares como consecuencia de atentados terroristas¹⁵, igualmente, la Alta Corporación de lo Contencioso Administrativo ha pasado de la responsabilidad culposa a la responsabilidad sin falta, esto es, del contexto de la falla probada

¹³ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del treinta (30) de enero de dos mil trece (2013), radicación No. 13001-23-31-000-1999-01306-01(25583), Consejero ponente (E): DANILO ROJAS BETANCOURTH.

¹⁴ Consejo de Estado, sentencia de 23 de septiembre de 1994, expediente 8577

¹⁵ Consejo de Estado, Sentencias de fecha: 27 de enero de 2000, expediente 8490; 20 de mayo de 2004 Expediente 15.393

Expediente: 19001-33-33-006-2014-00152-00
Demandante: YAMITETH BALANTA LUCUMÍ Y OTROS
Demandado: NACION – MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA NACIONAL Y OTRO
Medio de Control: REPARACION DIRECTA

del servicio¹⁶, al de riesgo excepcional, daño especial y a la nueva noción de la teoría del riesgo – conflicto.

La teoría del daño especial se soporta en la ruptura del principio de igualdad frente a las cargas públicas, además de contener un alto fundamento en los principios de equidad y solidaridad, ante el perjuicio especial y anormal que debe soportar el administrado¹⁷. De igual forma, el H. Consejo de Estado ha acudido a la figura del riesgo excepcional¹⁸ en los casos en que el atentado tiene como objetivo construcciones tales como: cuarteles, instalaciones militares o centros de comunicaciones, ante las cuales subsiste latente la idea de riesgo, e igualmente en los eventos de confrontación entre la subversión y la autoridad, donde, se afirma, se está exponiendo a la población a un riesgo excepcional que excede el límite de lo permitido y que por tanto deriva en la responsabilidad del Estado pese a que se está ante el ejercicio de una actividad lícita y no media culpa o negligencia de la autoridad estatal.

De otro lado, **la nueva teoría del riesgo – conflicto** parte de la situación de conflicto armado, en aquellos eventos en los cuales la población civil sufre los efectos de los ataques armados de grupos insurgentes dirigidos en contra de bienes e instalaciones tales como estaciones de policía, cuarteles militares u oleoductos, considerados por la dinámica propia del conflicto armado como blanco de continuos y violentos ataques por parte de la guerrilla que los considera objetivos militares.

Sobre lo antes considerado, se resalta el siguiente aparte jurisprudencial:

En el punto de la atribución de responsabilidad administrativa por ataques guerrilleros contra bienes del Estado cuando no existía falla del servicio, la jurisprudencia del Consejo de Estado no mostró una evolución coherente. Si bien inicialmente el fundamento de la obligación de reparar se estableció con base

¹⁶ Consejo de Estado, ssentencia de 21 de junio de 2007. Expediente. 25627. En esta providencia se reitera la tesis conforme a la cual el Estado no responde cuando el ataque es indiscriminado y no hay pruebas de amenazas o de hechos que hagan suponer la inminencia del mismo. Sentencia de 9 de junio de 2010, Expediente 18536: se consideró la responsabilidad estatal a título de falla del servicio como quiera que la Fuerza Pública tenía conocimiento, por el hecho de que acciones terroristas de similar magnitud ya habían ocurrido en el sector y a pesar de ello, no se tomaron las medidas de seguridad necesarias para evitarlo. No obstante, no se descartó el título de imputación denominado daño especial, en tanto el ataque se dirigió en contra de una entidad estatal.

¹⁷ Sobre la teoría del daño especial se relacionan las sentencia dictadas por el H. Consejo de Estado el 15 de octubre de 2008, expediente AG2001-605; el 03 de mayo de 2007, expediente 16696; el 28 de octubre de 2008, expediente 17278; el 7 de Julio de 2011. Expediente 20835; el 18 de enero de 2012, Expediente 18154

¹⁸ Respecto al título de imputación del riesgo excepcional se destaca las sentencias de fecha 22 de enero de 1996 Expediente 10648; 6 de octubre de 2005, Expediente AG- 00948.

Expediente: 19001-33-33-006-2014-00152-00
Demandante: YAMITETH BALANTA LUCUMÍ Y OTROS
Demandado: NACION – MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA NACIONAL Y OTRO
Medio de Control: REPARACION DIRECTA

en el régimen de daño especial, en los últimos años el título de imputación empleado fue el de riesgo excepcional. Con todo, esto no significó un abandono completo y definitivo del régimen de daño especial, por lo cual puede afirmarse que la jurisprudencia en este punto continuó siendo vacilante. (...) Esta situación motivó que en reciente pronunciamiento, la Sección Tercera del Consejo de Estado en pleno abordara el debate sobre la responsabilidad estatal en casos como el que hoy se estudia, señalando que, así como la Constitución Política de 1991 no privilegió ningún régimen de responsabilidad extracontractual en particular, así tampoco podía la jurisprudencia establecer un único título de imputación a los eventos en los cuales los particulares resulten afectados por ataques perpetrados por grupos guerrilleros contra bienes o instalaciones del Estado, ya que éste puede variar en consideración a las circunstancias fácticas acreditadas dentro del proceso y a los parámetros o criterios jurídicos que el juez estime relevantes dentro del marco de su argumentación: (...) se precisa que aunque el título de imputación utilizado por la Sección Tercera en la sentencia transcrita haya sido el de daño especial, ello no implica que todos los casos en los que se discuta la responsabilidad del Estado por daños derivados de ataques o tomas guerrilleras tengan que resolverse de la misma forma pues, se insiste, el juez puede válidamente considerar que existen razones tanto jurídicas como fácticas que justifican la aplicación de un título o una motivación diferente. (...) Históricamente, la jurisprudencia ha definido tres modalidades básicas de responsabilidad por riesgo: el riesgo-peligro; el riesgo-beneficio y el riesgo-álea. Sin embargo, los casos que involucran daños derivados de ataques guerrilleros a bienes o instalaciones del Estado, plantean una nueva categoría de riesgo, que no encaja dentro de las anteriores, y que se deriva de la confrontación armada que surge de la disputa por el control del territorio y el monopolio del uso de la fuerza.

RIESGO CONFLICTO - Noción. Definición. Concepto

Esta categoría de riesgo, que podría denominarse riesgo-conflicto, surge del reconocimiento de que, dada la situación de conflicto armado, el cumplimiento de ciertos deberes legales y constitucionales genera para la población civil un riesgo de naturaleza excepcional en la medida en que la pone en peligro de sufrir los efectos de los ataques armados que los grupos

Expediente: 19001-33-33-006-2014-00152-00
Demandante: YAMITETH BALANTA LUCUMÍ Y OTROS
Demandado: NACION – MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA NACIONAL Y OTRO
Medio de Control: REPARACION DIRECTA

guerrilleros dirigen contra los bienes e instalaciones que sirven como medio para el cumplimiento de esos deberes y el desarrollo de dichas actividades. De esta forma, se considera que los atentados cometidos por la guerrilla contra un "objeto claramente identificable como Estado" en el marco del conflicto interno armado, tales como estaciones de policía, cuarteles militares u oleoductos, pueden ser imputados al Estado a título de riesgo excepcional no porque estos bienes e instalaciones puedan ser considerados peligrosos en sí mismos –como sí ocurre con los objetos que encuadran dentro de la categoría riesgo-peligro (p.e. armas de dotación oficial, químicos o instalaciones eléctricas)–, sino porque la dinámica misma del conflicto armado ha hecho que la cercanía a ellos genere para la población civil el riesgo de sufrir afectaciones en su vida, su integridad personal y su patrimonio en razón a que son blanco de continuos y violentos ataques por parte de la guerrilla que los considera objetivos militares.

Para que pueda imputarse responsabilidad a la administración a título de riesgo excepcional por los daños derivados de ataques guerrilleros contra bienes o instalaciones del Estado es necesario que el factor de imputación, esto es, el riesgo, exista realmente, lo cual puede acreditarse a través de distintos medios de prueba, que den cuenta de la situación de orden público en la región, o también puede inferirse a partir de la existencia de antecedentes de ataques similares al mismo municipio o de municipios aledaños, de la noticia de la presencia de actores armados en la región, y de los medios que se utilizaron para perpetrar el ataque. Sin perjuicio de lo anterior, la Sala considera que en la medida en que el Estado participa consciente y deliberadamente en la creación del riesgo, debe adoptar todas las medidas de precaución, contención y defensa a su alcance para minimizarlo y para evitar que se materialice, pues si no lo hace y facilita la actuación de los grupos armados ilegales, se configura una ostensible falla del servicio que da lugar a un juicio de responsabilidad de naturaleza distinta, fundado en el incumplimiento del deber positivo de protección que le es exigible, no sólo respecto de los bienes y personas civiles, sino también de quienes participan en las hostilidades y de los bienes de carácter militar.”¹⁹

¹⁹ Consejo de Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección B, sentencia del veintinueve (29) de octubre de dos mil doce (2012), Radicación número: 25000-23-26-000-1993-08632-01(18472), Consejero ponente: Danilo Rojas Betancourth

Expediente: 19001-33-33-006-2014-00152-00
Demandante: YAMITETH BALANTA LUCUMÍ Y OTROS
Demandado: NACION – MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA NACIONAL Y OTRO
Medio de Control: REPARACION DIRECTA

4.3- La escogencia de títulos de imputación dependiendo de la realidad probatoria y jurídica del caso concreto²⁰

17. En reciente sentencia de unificación, la Sección Tercera de esta Corporación, estudió la responsabilidad estatal por actos violentos de terceros. Allí se afirmó que así como la Constitución de 1991 no privilegió ningún título de imputación, el juez contencioso administrativo no puede escoger un único título de imputación en daños ocasionados por actos violentos de terceros, tales como ataques de grupos armados organizados al margen de la ley contra bienes o instalaciones del Estado, toda vez que en función de la situación fáctica probada dentro del proceso los escenarios pueden variar, al respecto se señaló:

En lo que se refiere al derecho de daños, como se dijo previamente, se observa que el modelo de responsabilidad estatal establecido en la Constitución de 1991 no privilegió ningún régimen en particular, sino que dejó en manos del juez la labor de definir, frente a cada caso concreto, la construcción de una motivación que consulte razones, tanto fácticas como jurídicas, que den sustento a la decisión que habrá de adoptar. Por ello, la jurisdicción contenciosa ha dado cabida a diversos "títulos de imputación" como una manera práctica de justificar y encuadrar la solución de los casos puestos a su consideración, desde una perspectiva constitucional y legal, sin que ello signifique que pueda entenderse que exista un mandato constitucional que imponga al juez la obligación de utilizar frente a determinadas situaciones fácticas un determinado y exclusivo título de imputación.

*En consecuencia, el uso de tales títulos por parte del juez debe hallarse en consonancia con la realidad probatoria que se le ponga de presente en cada evento, de manera que la solución obtenida consulte realmente los principios constitucionales que rigen la materia de la responsabilidad extracontractual del Estado, tal y como se explicó previamente en esta sentencia²¹.
(Se subraya)*

²⁰ Consejo de Estado, sala Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección Subsección C. C.P. Ramiro Pazos

Radicación número: 1900123310001999096201 (23630)

²¹ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 19 de 2012, rad. 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón, reiterada en la sentencia de agosto 23 de 2012, rad. 23219, C.P. Hernán Andrade Rincón. Estas decisiones se refieren a los daños causados a inmuebles de propiedad de la población civil durante el ataque perpetrado por la guerrilla de las FARC a la estación de policía del municipio de Silvia (Cauca) el 19 de mayo de 1999.

Expediente: 19001-33-33-006-2014-00152-00
Demandante: YAMITETH BALANTA LUCUMÍ Y OTROS
Demandado: NACION – MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA NACIONAL Y OTRO
Medio de Control: REPARACION DIRECTA

Conclusiones de la evolución jurisprudencial

18. Teniendo en cuenta el anterior recuento jurisprudencial, es importante señalar que la jurisprudencia de la Sección ha proferido múltiples decisiones en las que ha atribuido responsabilidad al Estado por daños causados por actos violentos de terceros; sin embargo, todavía falta por dilucidar con precisión el criterio de definición y alcance de este tipo de actos²², la diferencia entre el acto de terrorismo propiamente dicho y los actos de combate en el marco del conflicto armado interno²³, y si el acto de terrorismo puede ser perpetrado por agentes del mismo Estado y en circunstancias de normalidad.

18.1 Hasta ahora, se han identificado genéricamente como "actos de terrorismo", fenómenos diversos y aun disimiles como los daños causados por la muerte de un inspector de policía²⁴, la incineración de vehículos de servicio público por parte de grupos organizados al margen de la ley²⁵, los carros bomba²⁶, los hechos ocurridos en 1985 en el Palacio de Justicia²⁷, el asesinato del doctor Enrique Low Murtra por parte de las mafias del narcotráfico²⁸, la bomba contra las instalaciones del DAS en Bogotá²⁹, el atentado en contra de su

²² Este déficit ha sido resaltado por la doctrina, cfr. HERNÁNDEZ ENRIQUEZ, Alier Eduardo y FRANCO GOMEZ, Catalina. *Responsabilidad Extracontractual del Estado, análisis de jurisprudencia del Consejo de Estado*, Ediciones Nueva Jurídica, Bogotá, 2007, pp. 550 a 552.

²³ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 19 de 2012, rad. 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón. Para definir la noción de conflicto armado interno, se acudió a la acuñada por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, en el caso "La Tablada" – Informe No. 55/97, Caso No. 11.137 - Juan Carlos Abella vs. Argentina, 18 de noviembre de 1997: "en contraste con esas situaciones de violencia interna, el concepto de conflicto armado requiere, en principio, que existan grupos armados organizados que sean capaces de librar combate, y que de hecho lo hagan, y de participar en otras acciones militares recíprocas, y que lo hagan. Los conflictos armados a los que se refiere el artículo 3, típicamente consisten en hostilidades entre fuerzas armadas del gobierno y grupos de insurgentes organizados y armados".

²⁴ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de agosto 10 de 2000, rad. 11585, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez.

²⁵ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de diciembre 11 de 1990, rad. 5417, C.P. Carlos Betancur Jaramillo; sentencia de marzo 21 de 1991, rad. 5595, C.P. Julio Cesar Uribe Acosta; sentencia de noviembre 12 de 1993, rad. 8233, C.P. Daniel Suárez Hernández; sentencia de febrero 8 de 1999, rad. 10731, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

²⁶ Es el caso, por ejemplo, del carro bomba que estalló en Cartagena el 17 de mayo de 1990 en el Centro Comercial de Boca Grande, cfr. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de noviembre 27 de 2002, rad. 13774, C.P. María Elena Giraldo; sentencia de febrero 21 de 2002, rad.13661, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

²⁷ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de agosto 19 de 1994, rad. 9276, C.P. Daniel Suárez Hernández; sentencia de febrero 2 de 1995, rad. 9273, C.P. Juan de Dios Montes Hernández; sentencia de septiembre 11 de 1997, rad. 11600, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros.

²⁸ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de junio 19 de 1997, rad. 11875, C.P. Daniel Suárez Hernández; sentencia de octubre 30 de 1997, rad. 10958, C.P. Ricardo Hoyos Duque.

²⁹ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencias de febrero 9 de 1995, rad. 9550, C.P. Julio Cesar Uribe Acosta; sentencia de julio 22 de 1996, rad. 10396, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros; sentencia de julio 10 de 1997, rad.10229, C.P. Ricardo Hoyos Duque; sentencia de abril 11 de 2002, rad. 10119, C.P. Alier Eduardo Hernández Enríquez; sentencia de julio 14 de 2004, rad. 14592, C.P. Alier Eduardo Hernández.

Expediente: 19001-33-33-006-2014-00152-00
Demandante: YAMITETH BALANTA LUCUMÍ Y OTROS
Demandado: NACION – MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA NACIONAL Y OTRO
Medio de Control: REPARACION DIRECTA

director³⁰, el homicidio perpetrado por los paramilitares a los integrantes de una comisión judicial en el corregimiento de la Rochela³¹, los ataques guerrilleros dirigidos en contra de objetivos militares³² o recientes decisiones en las que se denomina actos de terrorismo a los daños causados a bienes inmuebles de civiles, el hurto y pérdida de ganado por incursiones guerrilleras³³, entre otros.

18.2 Es por esta razón, siguiendo el precedente de unificación sentado en la materia³⁴, según el juez administrativo debe escoger el título de imputación de responsabilidad según las especificidades del hecho en concreto y de acuerdo con los desarrollos de la doctrina nacional³⁵, podemos decir que frente a los regímenes que estructuran la responsabilidad del Estado por daños producidos por actos violentos de terceros, que: (1) si la acción u omisión del Estado que produce el daño es ilegítima e imputable a este, el fundamento de la responsabilidad lo constituye la falla del servicio; (2) si la actividad del Estado es, en cambio, legítima y, además, riesgosa, y el daño es producto de la concreción del riesgo que ella conscientemente crea para el cumplimiento de ciertos deberes legales y constitucionales asignados, el fundamento será el título de riesgo excepcional³⁶; y (3) si la acción del Estado es legítima y no es riesgosa y se ha desarrollado en cumplimiento de un encargo o mandato legal y en beneficio del interés general, pero con ella se ha producido un perjuicio concreto, grave y especial a un particular o a un grupo de particulares, el fundamento será el título de daño especial.”

³⁰ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de septiembre 23 de 1994, rad. 8577, C.P. Julio Cesar Uribe Acosta.

³¹ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de septiembre 4 de 1997, rad. 10140, C.P. Jesús María Carrillo Ballesteros.

³² Entre las sentencias por ataques a objetivos militares podemos mencionar las siguientes: Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de diciembre 9 de 2004, rad. 14174, C.P. Germán Rodríguez Villamizar; sentencia de marzo 10 de 2005, rad. 15182, C.P. Germán Rodríguez Villamizar; sentencia de junio 28 de 2006, rad. 16630, C.P. Ruth Stella Correa Palacio; sentencia de diciembre 5 de 2006, rad. 28459, C.P. Ruth Stella Correa Palacio.

³³ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de febrero 28 de 2013, rad. 27959, C.P. Danilo Rojas Betancourth; sentencia de abril 19 de 2012, rad. 21515, C.P. Hernán Andrade Rincón.

³⁴ Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de abril 19 de 2012, rad. 21515., C.P. Hernán Andrade Rincón.

³⁵ Cfr. M^o CAUSLAND, María Cecilia. “Responsabilidad del Estado por daños causados por actos violentos de terceros”, en *La filosofía de la responsabilidad civil. Estudios sobre los fundamentos filosófico-jurídicos de la responsabilidad civil extracontractual*. Bogotá, Universidad Externado de Colombia, 2013, p. 529.

³⁶ Esta Subsección precisó en una decisión relativamente reciente que “los casos que involucran daños derivados de ataques guerrilleros a bienes o instalaciones del Estado, plantean una nueva categoría de riesgo [...] Esta categoría de riesgo, que podría denominarse riesgo-conflicto, surge del reconocimiento de que, dada la situación de conflicto armado, el cumplimiento de ciertos deberes legales y constitucionales genera para la población civil un riesgo de naturaleza excepcional en la medida en que la pone en peligro de sufrir los efectos de los ataques armados que los grupos guerrilleros dirigen contra los bienes e instalaciones que sirven como medio para el cumplimiento de esos deberes y el desarrollo de dichas actividades”. Consejo de Estado, Sección Tercera, sentencia de octubre 29 de 2012, rad. 18472, C.P. Danilo Rojas Betancourth.

Expediente: 19001-33-33-006-2014-00152-00
Demandante: YAMITETH BALANTA LUCUMÍ Y OTROS
Demandado: NACION – MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA NACIONAL Y OTRO
Medio de Control: REPARACION DIRECTA

Según lo expuesto, a través del material probatorio recaudado, se procederá a analizar si se han acreditado los elementos constitutivos de los títulos de imputación antes relacionados.

4.4- La imputación del daño al Estado

La parte actora alega que el daño es imputable a la Nación- Ministerio de Defensa- -Policía Nacional, a título de daño especial al que se vieron inmiscuidos en los hostigamiento dirigido a una institución del Estado, en este caso, la Estación de Policía del Municipio de Suarez Cauca.

Adicionalmente se achaca responsabilidad al ente territorial por cuanto ha permitido o tolerado la instalación de la estación Policial, lo que a su juicio hace más vulnerable a la comunidad civil, en el marco de los constantes hostigamientos que padece la fuerza pública por parte de grupos guerrilleros que han hecho presencia histórica en la región.

En cuanto a la teoría del daño especial se soporta en la ruptura del principio de igualdad frente a las cargas públicas, además de contener un alto fundamento en los principios de equidad y solidaridad, ante el perjuicio especial y anormal que debe soportar el administrado³⁷. El máximo Tribunal de lo Contencioso Administrativo³⁸, en sentencia de 9 de Mayo de 2012, tras citar jurisprudencia de la sección tercera³⁹ dijo:

*"(...) la teoría del daño especial reúne una buena muestra de los eventos en que, con el ánimo de buscar un resultado satisfactorio desde una óptica de justicia material, se **utiliza la equidad para reequilibrar las cargas públicas, honrando así el principio de igualdad**. En otras palabras, la teoría del daño especial, contando con el substrato de la equidad que debe inspirar toda decisión judicial, se vale de la igualdad para fundamentar las soluciones que buscan restablecer el equilibrio ante las cargas de la administración*

³⁷ Sobre la teoría del daño especial se relacionan las sentencia dictadas por el H. Consejo de Estado el 15 de octubre de 2008, expediente AG2001-605; el 03 de mayo de 2007, expediente 16696; el 28 de octubre de 2008, expediente 17278; el 7 de Julio de 2011. Expediente 20835; el 18 de enero de 2012, Expediente 18154

³⁸ Consejo de Estado. Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Subsección C, C.P.: Olga Mérida Valle de la Hoz, Bogotá, nueve (09) de mayo de dos mil doce (2012), Radicación número: 25000-23-26-000-1999-00644-01(23300), Actor: ALVARO OTALORA CELIS, Demandado: MINISTERIO DE DEFENSA NACIONAL - EJERCITO NACIONAL Y OTROS.

³⁹ Consejo de Estado; Sección Tercera; Sentencia del 18 de marzo de 2010; Exp. 15591

Expediente: 19001-33-33-006-2014-00152-00
Demandante: YAMITETH BALANTA LUCUMÍ Y OTROS
Demandado: NACION – MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA NACIONAL Y OTRO
Medio de Control: REPARACION DIRECTA

*en situaciones concretas, **objetivo que se alcanza gracias a la asunción del principio de solidaridad como argumento de impulsión de la acción reparadora del Estado, como se observará al momento de considerar el caso concreto.** (...) Se denota claramente la gran riqueza sustancial que involucra la teoría del daño especial y, como no, lo esencial que resulta a un sistema de justicia que, como el de un Estado Social de Derecho, debe buscar mediante el ejercicio de su función la efectiva realización de los valores y principios esenciales al mismo". (Negrillas fuera de texto).*

Está probado que el daño antijurídico se produjo por el hostigamiento de que fue objeto la Estación de Policía por miembros al margen de la ley quienes procedieron a atacarlos utilizando armas convencionales y no convencionales, hechos en los cuales resultó herida la señora Yamilteh Balanta Lucumí tal expresamente lo indica el Comandante de la Estación de Policía de dicha municipalidad en informe ejecutivo que dirige al Subcomandante del Departamento de Policía Cauca.

Resulta diáfano que el ataque iba dirigido contra la Estación de Policía, como objetivo militar de los grupos insurgencias que históricamente han militado en la región, según se observa del informe de alertas de violación de los derechos humanos a la población civil emanado de la Defensoría del Pueblo donde claramente se observa que era de conocimiento del Estado de la Intención de atacar las estaciones policiales y que igualmente era de conocimiento de las autoridades locales tal como quedó plasmado en el acta del 27 noviembre de 2013, del Comité de Seguridad del mentado Municipio y que si bien es cierto su data es posterior a la ocurrencia de los hechos, no cabe duda que con anterioridad al insuceso era sabido de las amenazas de las tomas a las estación de policía por parte de la FARC. Si bien es cierto del informe oficial se establece que los policiales activaron el plan defensa, en el cual no se puede avizorar falla alguna del servicio, ante certera intención de atacar por parte de los facinerosos una entidad estatal, es Estado el llamado a responder por los daños colaterales causados a los civiles con fundamento en la teoría del Daño especial. Al respecto el Consejo de Estado ha dicho:

"En concepto de la Sala, el acervo probatorio aporta seguridad inconcusa sobre la intención de los autores del acto terrorista: atacar la patrulla de la policía. Estos hechos sirven como fundamento de aplicación de la teoría del daño especial, visión que acentúa su enfoque en la lesión

Expediente: 19001-33-33-006-2014-00152-00
Demandante: YAMITETH BALANTA LUCUMÍ Y OTROS
Demandado: NACION – MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA NACIONAL Y OTRO
Medio de Control: REPARACION DIRECTA

*sufrida por la víctima, que debe ser preservada frente al perjuicio no buscado, no querido, ni tampoco merecido. **Esta teoría, con fuerte basamento en la equidad y la solidaridad, se enmarca dentro de los factores objetivos de imputación de responsabilidad estatal con los que se ha enriquecido este catálogo**". (Negrillas fuera de texto).*

Bajo este contexto, la existencia de una estación de policía en casco municipal no denota perse una falla del servicio, dado que estos bienes no puede ser considerados peligrosos en si sí mismos, sino porque se han desarrollado en cumplimiento de un encargo o mandato legal y en beneficio del interés general, sin embargo con ella se ha producido un perjuicio concreto, grave y especial a un particular o a un grupo de particulares, afectando su patrimonio en razón a que son blanco de continuos y violentos ataques por parte de la guerrilla que los considera objetivos militares., por tanto considera el Juzgado que no le asiste legitimación en la causa por pasiva al Municipio de Suarez Cauca.

4.5- La legitimación en la causa por activa

De las copias auténticas de los registros civiles⁴⁰ se establece que la señora Yamileth Balanta Lucumí, es hija de Carmen Tulia Lucumí Chapurri y Jorge Balanta; los señores José Arlex Balanta Lucumí, Jairo Alonso y Fayzuli Balanta Lucumí, son hermanos de Yamileth Balanta Lucumí. Además que Jhelen Balanta Solarte, es hija de Jairo Alfonso por tanto sobrina de Yamileth Balanta Lucumi.

Por su parte el señor Aldemar Lucumí Chapurri y Carmen Tulia Lucumí Chapurri son hermanos, pese a que el primero de ellos registra como primer apellido el materno⁴¹, a pesar que quien se presentó a la diligencia de reconocimiento ante la Registraduría Nacional del Estado Civil e hizo constar que era su hijo fue el señor Tulio Alberto Lucumí, situación que se despeja totalmente con la copia de la cédula de ciudadanía a nombre del señor Aldemar Lucumí Chapurri⁴²

Debe precisar el despacho que la demanda se admitió⁴³ en relación con los señores Yamileth Balanta Lucumí, Carmen Tulia Lucumí Chapurri, José Arlex, Fayzuli y Jairo Alonso Balanta Lucumí, este

⁴⁰ Folio 11 del cuaderno principal1.

⁴¹ Folio 18 del cuaderno principal1.

⁴² Folio 18 del cuaderno principal1.

⁴³ Folio 122 y ss del cuaderno principal1

Expediente: 19001-33-33-006-2014-00152-00
Demandante: YAMITETH BALANTA LUCUMÍ Y OTROS
Demandado: NACION – MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA NACIONAL Y OTRO
Medio de Control: REPARACION DIRECTA

último en nombre propio y representación de Jhelen Balanta Solarte y Aldemar Lucumí Chapurri, no así respecto de la señora Carmen Rosa Balanta Lucumí ni Tulio Alberto Lucumí dado que no se acreditó que hubiere otorgado poder para actuar.

Perjuicios

A efecto de determinar y cuantificar los perjuicios que la parte actora dice padecer nos remitiremos a declaración de la señora REINELA GARCIA.

Manifestó que conocer a la señora Yamileth Balanta Lucumí y a su grupo familiar dado que son residentes del mismo municipio, refiere conocer a su madre la señora Carmen; a Jairo, Fayzuli, quienes son sus hermanos, así como Aldemar y Gladis, quienes son sus tíos.

Sobre lo sucedido el día 5 de noviembre de 2013, relató que la señora Yamileth se encontraba barriendo al lado de la estación de Policía, alrededor de la 6 a.m. o 7 a.m., cuando en la calle de la Estación cayó la bomba o tatuco resultando herida en el brazo y pierna izquierda. Dice que observó que llevaron a la señora Yamileth al hospital, y que estaba muy asustada y nerviosa.

Sobre la actividad económica que desempeñaba la señora Yamileth Balanta adujo que laboraba en servicios varios en la Estación de Policía y que pasado el insuceso cinco meses después regresó a trabajar de manera normal sin embargo, se encuentra muy nerviosa por lo sucedido.

Relató que la señora Yamileth vive con su mamá, la hermana y los niños de Fayzuli y los otros miembros de la familia viven en residencias diferentes del Municipio de Suarez.

Sobre las relaciones de afecto del grupo familiar, dijo que eran muy unidos, que están pendientes de ella debido a lo acontecido. Dijo que el grupo familiar estaban muy asustados y le brindan mucho apoyo a la lesionada, en especial el señor Aldemar Lucumí quien estuvo al tanto de la recuperación de su salud.

Respecto las condiciones anímicas de la lesionada dijo que variaron con respecto al insuceso dado que en la actualidad se encuentra muy asustada y por ello no quería ir a trabajar. Adicionalmente mencionó que la señora Yamileth escucha bien y que no puede caminar muy

Expediente: 19001-33-33-006-2014-00152-00
Demandante: YAMITETH BALANTA LUCUMÍ Y OTROS
Demandado: NACION – MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA NACIONAL Y OTRO
Medio de Control: REPARACION DIRECTA

bien. Así mismo dijo que su estado anímico ha cambiado pues antes era alegre y ahora se encuentra triste

Sobre su estado de salud refirió que no es normal, toda vez que ella tiene problema de la “**rodilla**” que le duele mucho y que los oídos se le vuelven “embombados”

Perjuicios Morales

Por concepto de perjuicios morales se solicita para:

- Yamileth Balanta, Carmen Tulia Balanta Chapurri, el equivalente a cien (100) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento del pago, para cada una de ellas.
- Jose Arlex Jairo Alonso Balanta Lucumí y Aldemar Lucumí Chapurri, el equivalente a noventa (90) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento del pago
- Jelehn Balanta Solarte y Fayzuly Balanta Lucumí., la suma ochenta (80) salarios mínimos legales mensuales vigentes al momento del pago-

Al respecto debe precisarse que no existe prueba que determine la pérdida de la capacidad laboral de la señora Yamileth Balanta Lucumí, por tanto no es posible acudir a la tabla fijada por el Consejo de Estado sobre la tasación de perjuicio moral en el caso de lesiones personales. Así las cosas se acudirá al arbitrio juris teniendo en cuenta las pruebas que obran en el proceso en especial la historia clínica en la que se registra

Datos de admisión⁴⁴ Fecha 05 de noviembre de 2013

Paciente adulto joven víctima de atentado terrorista quien presenta herida por esquirla en pierna izquierda y brazo izquierdo en el momento sin signos duros o blandos de lesión vascular (...) se remite para valoración de cirugía general.

Fecha atención de consulta 06 de noviembre de 2013, Hora 9:54 am.⁴⁵

⁴⁴ Folio 73 y ss del cuaderno principal 2.

⁴⁵ Folio 19 y ss del cuaderno principal 1.

Expediente: 19001-33-33-006-2014-00152-00
Demandante: YAMITETH BALANTA LUCUMÍ Y OTROS
Demandado: NACION – MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA NACIONAL Y OTRO
Medio de Control: REPARACION DIRECTA

Ingresa paciente de sexo femenino de 31 años de edad al servicio de hospitalización procedente de servicio de urgencias, paciente que fue remitida a la clínica la Estancia en Popayán por sufrir heridas ocasionadas por esquirlas en atentado terrorista, pero fue contravenida para manejo con antibiótico por 10 días corresponde a nivel 1 consiente orientada en tiempo lugar y persona con diagnóstico de herida del brazo se observa en miembro superior e inferior izquierdo gasas y esparadrapo cubriendo heridas ...”

Nota de atención del servicio de hospitalización 10:28 a.m.

Paciente quien el día de ayer en medio del atentado a la estación de policía Recibe herida por esquirlas en brazo izquierdo y pierna izquierda fue valorada por cirujano en clínica la estancia de Popayán donde contra remiten con indicación de tratamiento ATB y curaciones diarias

Jueves 14 de noviembre de 2013.

Paciente que el día de hoy completa 8 días con tratamiento antibiótico, manifiesta sentirse bien, actualmente paciente en buenas condiciones generales afebril sin signos de dificultad respiratoria tolerancia o vía oral. (...)

Extremidades móviles no edema, llenado menor de dos segundos, se evidencia heridas por onda explosiva sin signos de infección local en brazo y pierna izquierda. SNC conservado, herida en brazo herida en pierna, secundaria a onda explosiva.

Plan: Egreso por mejoría de cuadro clínica con evaluación satisfactoria continuar seguimiento con cirugía general, formula y recomendaciones, continua con antibiótico oral, valoración por cirugía general para continuar manejo.

Obra la copia del Informe de pericial clínica forense emanado del Instituto de Medicina Legal y Ciencias Forenses Unidad Básica de Santander de Quilichao, del 18 de noviembre de 2013, en donde se registra:

“ (...) La examinada refiere que el 5 de noviembre de 2013, a eso de las 18 y 40 estaba en la estación de policía de Suarez trabajando cuando cerca de ahí cayo un artefacto explosivo , recibe heridas por esquirlas en brazo izquierdo y pierna Izquierda.

Expediente: 19001-33-33-006-2014-00152-00
Demandante: YAMITETH BALANTA LUCUMÍ Y OTROS
Demandado: NACION – MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA NACIONAL Y OTRO
Medio de Control: REPARACION DIRECTA

(...) Miembros Superiores herida en proceso de cicatrización del 1.5 x0.5 cms de diámetro, localizadas en el brazo izquierdo cara posterior tercio medio.

Miembros inferiores: 1 Herida en proceso de cicatrización de 1.5 x 0.5 cms de diámetro localizada en la pierna, cara posterior tercero medio, dolorosa a la palpación se acompaña de edema 2.- Dolor al caminar.

(...) ANALISIS, INTRERPRETACION Y CONCLUSIONES.

Al examen presente lesiones actuales consistentes con el relato de los hechos mecanismo traumático de la lesión: Agentes y mecanismo explosivo. Incapacidad médico legal definitiva veinte (20) días secuelas medico legales: 1.- Deformidad física que afecta el cuerpo de carácter permanente; 2.- Perturbación funcional del miembro inferior izquierdo de carácter transitorio. 3.- Perturbación funcional del órgano de la locomoción de carácter transitorio.

Conforme las pruebas que se analizan el juzgado constata que la lesión padecida por la señora Yamileth Balanta Lucumí, no es de carácter grave en tanto no puso en riesgo su vida, y generó una incapacidad médico legal definitiva de 20 días. Ello a pesar de produjo secuelas de carácter transitorio y una deformidad consistente en una cicatriz que el afecta su cuerpo.

Por tanto se considera que en efecto la lesionada ha padecido un dolor y aflicción por cuenta de las heridas producidas el día de marras y por tanto se reconocerá la suma de QUINCE (15 salarios mínimos)

De acuerdo a la jurisprudencia del Consejo de Estado que indica que se presume el dolor y aflicción de los familiares de la lesionada se reconocerán perjuicios morales así:

CARMEN TULIA LUCUMÍ CHAPURRI, en su condición de madre, la suma de QUINCE (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

JORGE BALANTA, JOSE ARLEX BALANTA LUCUMÍ, JAIRO ALFOSO Y FAYZULI BALANTA LUCUMÍ, en su calidad de hermanos la suma de SIETE PUNTO CINCO (7.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Expediente: 19001-33-33-006-2014-00152-00
Demandante: YAMITETH BALANTA LUCUMÍ Y OTROS
Demandado: NACION – MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA NACIONAL Y OTRO
Medio de Control: REPARACION DIRECTA

ALDEMAR LUCUMÍ, teniendo en cuenta la prueba testimonial que refieren su preocupación y congoja por el estado de salud de su sobrina, la suma de TRES PUNTO CINCO (3.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

No se reconocerán perjuicios morales a nombre de Jhelen Balanta Lucumi dado que no se acreditó dolor y congoja de su parte.

b. Perjuicios por daño a la salud:

- **Daño a la salud/perjuicio fisiológico – Alteración a las condiciones de existencia.**

Sobre el reconocimiento de perjuicios por daño a la salud, valga resaltar que en sentencia del dieciséis (16) de septiembre de dos mil trece (2013), el Consejo de Estado - Sala de Lo Contencioso Administrativo Sección Tercera, Subsección A, Consejero ponente: MAURICIO FAJARDO GOMEZ, Radicación número: 50001-23-31-000-2000-00031-01(29088), señaló:

"(...) la Sala había considerado que cuando se trata de lesiones que producen alteraciones físicas que afectan la calidad de vida de las personas, éstas tienen derecho al reconocimiento de una indemnización adicional a la que se reconoce por el perjuicio moral; es decir, el reconocimiento de esta clase de perjuicios no debe limitarse a los casos de lesiones corporales que producen alteraciones orgánicas, sino que debe extenderse a todas las situaciones que alteran de manera grave las condiciones habituales o de existencia de las personas⁴⁶.

El H. Consejo de Estado unificó criterios jurisprudenciales para la tasación de este perjuicio, en los siguientes términos:

"En los casos de reparación del daño a la salud se reiteran los criterios contenidos en la sentencia de unificación del 14 de septiembre de 2011, exp. 19031, proferida por la Sección Tercera de la Sala de lo Contencioso Administrativo, y se complementan los términos de acuerdo con la evolución jurisprudencial de la Sección Tercera.

⁴⁶Cf. Consejo de Estado. Sección Tercera, sentencia de 1 de noviembre de 2007, expediente 16.407, reiterada recientemente en la sentencia del 13 febrero de 2013; exp. 26.030.

Expediente: 19001-33-33-006-2014-00152-00
 Demandante: YAMITETH BALANTA LUCUMÍ Y OTROS
 Demandado: NACION – MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA NACIONAL Y OTRO
 Medio de Control: REPARACION DIRECTA

La indemnización, en los términos del fallo referido está sujeta a lo probado en el proceso, única y exclusivamente para la víctima directa, en cuantía que no podrá exceder de 100 S.M.L.M.V, de acuerdo con la gravedad de la lesión, debidamente motivada y razonada, conforme a la siguiente tabla:

GRAFICO REPARACION DEL DAÑO A LA SALUD	
REGLA GENERAL	
GRAVEDAD DE LA LESIÓN	Víctima directa
	SMLMV
Igual o superior al 50%	100
Igual o superior al 40% e inferior al 50%	80
Igual o superior al 30% e inferior al 40%	60
Igual o superior al 20% e inferior al 30%	40
Igual o superior al 10% e inferior al 20%	20
Igual o superior al 1% e inferior al 10%	10

Bajo este propósito, el juez debe determinar el porcentaje de la gravedad o levedad de la afectación corporal o psicofísica, debidamente probada dentro del proceso, relativa a los aspectos o componentes funcionales, biológicos y psíquicos del ser humano.

Para lo anterior el juez deberá considerar las consecuencias de la enfermedad o accidente que reflejen alteraciones al nivel del comportamiento y desempeño de la persona dentro de su entorno social y cultural que agraven la condición de la víctima. Para estos efectos, de acuerdo con el caso, se podrán considerar las siguientes variables:

- *La pérdida o anormalidad de la estructura o función psicológica, fisiológica o anatómica (temporal o permanente)*
- *La anomalía, defecto o pérdida producida en un miembro, órgano, tejido u otra estructura corporal o mental.*
- *La exteriorización de un estado patológico que refleje perturbaciones al nivel de un órgano.*
- *La reversibilidad o irreversibilidad de la patología.*
- *La restricción o ausencia de la capacidad para realizar una actividad normal o rutinaria.*
- *Excesos en el desempeño y comportamiento dentro de una actividad normal o rutinaria.*
- *Las limitaciones o impedimentos para el desempeño de un rol determinado. - Los factores sociales, culturales u ocupacionales.*
- *La edad.*
- *El sexo.*
- *Las que tengan relación con la afectación de bienes placenteros, lúdicos y agradables de la víctima.*
- *Las demás que se acrediten dentro del proceso.*

Expediente: 19001-33-33-006-2014-00152-00
Demandante: YAMITETH BALANTA LUCUMÍ Y OTROS
Demandado: NACION – MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA NACIONAL Y OTRO
Medio de Control: REPARACION DIRECTA

En casos excepcionales, esto es, cuando existan circunstancias debidamente probadas de una mayor intensidad y gravedad del daño a la salud podrá otorgarse una indemnización mayor a la señalada en la tabla anterior, sin que en tales casos el monto total de la indemnización por este concepto pueda superar la cuantía equivalente a 400 S.M.L.M.V. Este quantum deberá motivarse por el juez y ser proporcional a la intensidad del daño, con aplicación de las mismas variables referidas. (...)

Con relación a los parámetros anteriores, se aclara que ellos son excluyentes y no acumulativos, de manera que la indemnización reconocida no podrá superar el límite de 400 S.M.L.M.V.

Ahora bien, es menester aclarar que los porcentajes antedichos son indicativos de gravedad, por lo que pueden traducir a categorías cualitativas. De ahí que los porcentajes iguales o superiores se pueden entender como daños cualitativamente graves e intensos, mientras que los de menor porcentaje se entenderán de mayor (sic) gravedad. Esto permite atenerse a los criterios porcentuales antedichos, aun cuando se carezca de un valor certificado.”⁴⁷

Así las cosas, la noción de daño a la salud garantiza un resarcimiento de los efectos que produce un daño en la integridad psicofísica de la persona, en sus diversas expresiones, verbigracia, daño estético, sexual, relacional, familiar o social.

Al respecto se itera que en la denominación del daño a la salud, el Consejo de Estado indicó que bajo esta denominación deben estudiarse todas las denominaciones de perjuicios, en lo que refiere al campos de relación familiares, hábitos o sociales, por tanto se entiende que la alteración a las condiciones de existencia, o cambio a la vida de relación se encuentra subsumido dentro de esta tipología de perjuicio a efecto de evitar una doble indemnización del daño inmaterial, que de acuerdo con las pruebas allegadas al plenario incrementaran la cuantificación de la indemnización del componente objetivo hasta llegar a los 400 S.M.L.M.V y se reconocerá a favor del lesionado.

Eb el caso sub examine se analiza de las pruebas aportadas al plenario que la lesión padecida por la señora Yamileth Balanta Lucumí se considera no es grave dado que no existió complicación alguna en su tratamiento, no puso en peligro su vida y genero una incapacidad definitiva de 20 días. A pesar de ello se acredita al plenario que existe

⁴⁷ Consejo De Estado, Sala de lo Contencioso Administrativo, Sección Tercera, Sala Plena, sentencia del veintiocho (28) de agosto de dos mil catorce (2014), radicación número: 23001-23-31-000-2001-00278-01(28804), Consejera ponente: Stella Conto Diaz Del Castillo.

Expediente: 19001-33-33-006-2014-00152-00
Demandante: YAMITETH BALANTA LUCUMÍ Y OTROS
Demandado: NACION – MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA NACIONAL Y OTRO
Medio de Control: REPARACION DIRECTA

una deformidad física que afecta el cuerpo de la lesionada en forma permanente, así como como una perturbación funcional de carácter transitorio, que causa dolor en la lesionada, sin embargo no se acreditó que por efecto de la lesión se redujera la capacidad laboral de la víctima, ni que le impida realizar sus actividades cotidianas.

Conforme lo anterior, se considera acreditado el daño a la salud y por tanto se reconocerá únicamente a favor de la lesionada la suma de QUINCE (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Frente a los restantes perjuicios de carácter inmaterial que dice padecer la señora Yamileth Balanta Lucumí, debe recalcar el despacho que al tenor de la jurisprudencia del Órgano de cierre de la Justicia Contenciosa, el abanico resarcitorio es cerrado y no abierto por tanto el H. Consejo de estado solo reconoce los perjuicios: (i) morales (ii) daño a la salud. (iii) daño a los bienes constitucionalmente protegidos (iv) los perjuicios de índole material.

Bajo esa línea de pensamiento, para el Juzgado no se encuentra acreditado de manera autónoma al daño a la salud, otro tipo de perjuicios de carácter inmaterial, por tanto se negará cualquier otro pedimento sobre perjuicio inmaterial.

c. Perjuicios materiales:

- Por daño emergente, se solicitó la suma de dos millones de pesos por concepto de gastos en medicamentos utilizados para recuperación del estado de salud de la lesionada. Al respecto no se observa prueba en el expediente de los gastos médicos en que tuvo que incurrir la señora Yamileth Balanta Lucumí a efecto recuperar su estado de salud por ello se negara dicho pedimento. Lo que se observa de la copia de la historia clínica es que fue atendida en la ESE Norte 1 con cargo a la cuenta Fondo de Solidaridad y garantía del Ministerio de Salud. En atención a ello se niega dicha pretensión.

- En lo que respecta al daño emergente futuro, se solicitó en la demanda medidas de rehabilitación tendientes a que se le brinde la asistencia médica necesaria para superar las secuelas que dejó el insuceso. Al respecto el Consejo de Estado ha estimado como procedentes este tipo medidas dentro de la órbita del daño emergente futuro y por tanto el Ministerio de Defensa, Policía Nacional deberá proporcionarle a Yamileth lo necesario para superar las secuelas en miembro inferior izquierdo en lo que respecta a la herida de la

Expediente: 19001-33-33-006-2014-00152-00
Demandante: YAMITETH BALANTA LUCUMÍ Y OTROS
Demandado: NACION – MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA NACIONAL Y OTRO
Medio de Control: REPARACION DIRECTA

esquirla únicamente, esto es, servicio médico, terapias y demás servicios que requiera⁴⁸.

Por Lucro cesante, se solicita lo dejado de percibir la victima por concepto de perdida de la capacidad laboral.

En el presente caso **no** se aportó prueba sobre el porcentaje de pérdida de capacidad laboral de la señora YAMILETH BALANTA LUCUMÍ y aunque se señale por única declarante que dejó de asistir a sus trabajo por varios meses, es claro que la afectación a la salud fue leve, concediéndose una incapacidad médico legal definitiva de 20 días.

Atendiendo a que no existe demostración objetiva que convenza a esta instancia de la incapacidad de carácter permanente de la señora YAMILETH BALANTA LUCUMÍ, para desarrollar una actividad económica productiva, únicamente se accederá al reconocimiento de 20 días de salario, término durante el cual se concedió incapacidad médico legal.

Como quiera que no se determinó la suma que devengaba la lesionada por concepto de oficios varios en la Estación de Policía, se tomará el salario mínimo conforme a la presunción establecida por la jurisprudencia del Consejo de Estado sobre la materia.

Así conforme al salario mínimo percibido para la época 20 días equivalen a:

$$589.500/30= 19.650$$
$$19650 \times 20 = 393.000$$

Indexación de la suma:

$$R= RH \frac{\text{Índice final}}{\text{Índice inicial}}$$

En la que el valor presente (R) se determina multiplicando el valor histórico (RH) que es lo dejado de percibir por el demandante por

⁴⁸ Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Consejero Ponente: Enrique Gil Botero. Bogotá, D. C, catorce (14) de septiembre de dos mil once (2011). Expediente: 19.031. Radicación: 05001232500019940002001. Actor: Antonio José Vigoya Giraldo y otros. Demandado: Nación – Ministerio de Defensa, Ejército Nacional –Asunto: Acción de reparación directa

Expediente: 19001-33-33-006-2014-00152-00
Demandante: YAMITETH BALANTA LUCUMÍ Y OTROS
Demandado: NACION – MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA NACIONAL Y OTRO
Medio de Control: REPARACION DIRECTA

concepto de salarios en la fecha de causación del perjuicio, por el guarismo que resulte de dividir el índice final de precios al consumidor certificado por el DANE, vigente en la fecha de esta providencia o el último conocido, por el índice vigente a la fecha de los hechos (05 de noviembre de 2013)

Reemplazando se tiene:

393.000 x 134.76 (enero 2017 último conocido a la fecha de la sentencia)

113,68 (noviembre de 2013)

390.000 x 1.185433 = **\$465.875**

Actualización lucro cesante: \$ 465.875

- De la condena en costas

Según lo previsto en el artículo 188 del CPACA, la sentencia deberá disponer "sobre la condena en costas, cuya liquidación y ejecución se regirán por las normas del Código de Procedimiento Civil"

En cuanto a los supuestos en que hay lugar a esa condena en costas, atendiendo a la remisión al Código General del Proceso, se tiene que en lo pertinente dispone:

"ARTÍCULO 365. CONDENA EN COSTAS. En los procesos y en las actuaciones posteriores a aquellos en que haya controversia, la condena en costas se sujetará a las siguientes reglas:

1. Se condenará en costas a la parte vencida en el proceso, o a quien se le resuelva desfavorablemente el recurso de apelación, casación, queja, súplica, anulación o revisión que haya propuesto. (...)

9. Sólo habrá lugar a costas cuando en el expediente aparezca **que se causaron** y en la medida de su **comprobación.**"

En este caso la parte demandada fue vencida en juicio, por lo cual se le condenará en costas según las preceptivas antes mencionadas. Para tales efectos se dispondrá que por Secretaría se liquiden las costas y agencias en derecho según lo dispuesto en el artículo 366 del CGP. Aclarando que conforme a lo indicado en el numeral 7 del

Expediente: 19001-33-33-006-2014-00152-00
Demandante: YAMITETH BALANTA LUCUMÍ Y OTROS
Demandado: NACION – MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA NACIONAL Y OTRO
Medio de Control: REPARACION DIRECTA

artículo 365 ibídem, las liquidaciones respectivas se harán por separado para cada litigante favorecido. Las agencias en derecho se tasan en el 0.5% del valor reconocido en las pretensiones

III. DE C I S I O N

En mérito de lo expuesto, **EL JUZGADO SEXTO ADMINISTRATIVO DEL CIRCUITO DE POPAYAN**, administrando Justicia en el nombre de la República y por Autoridad de la Ley,

RESUELVE:

PRIMERO: DECLÁRESE la falta de legitimación del Municipio de Suarez, conforme los considerandos arriba expuestos.

SEGUNDO: CONDENAR a la **NACION – MINISTERIO DE DEFENSA POLICIA NACIONAL**, administrativamente responsable de las lesiones padecidas por la señora YAMILETH BALANTA LUCUMÍ, por los hechos ocurridos el cinco (05) de noviembre dos mil trece (2013) en el Municipio de Suarez, conforme a lo enunciado en la parte motiva de esta providencia.

TERCERO: CONDÉNESE a la **NACION – MINISTERIO DE DEFENSA POLICIA NACIONAL** a pagar a los demandantes las siguientes sumas de dinero:

Por concepto de perjuicio moral:

A favor de los señores:

YAMILETH BALANTA LUCUMÍ y CARMEN TULIA LUCUMÍ CHAPURRI, la suma de QUINCE (15) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada una de ellas

JORGE BALANTA, JOSE ARLEX BALANTA LUCUMÍ, JAIRO ALONSO Y FAYZULI BALANTA LUCUMÍ, la suma de SIETE PUNTO CINCO (7.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes, para cada uno de ellos.

ALDEMAR LUCUMÍ, la suma de TRES PUNTO CINCO (3.5) salarios mínimos legales mensuales vigentes.

Expediente: 19001-33-33-006-2014-00152-00
Demandante: YAMITETH BALANTA LUCUMÍ Y OTROS
Demandado: NACION – MINISTERIO DE DEFENSA-POLICIA NACIONAL Y OTRO
Medio de Control: REPARACION DIRECTA

Por concepto de daño a la salud:

A favor de la señora YAMILETH BALANTA LUCUMÍ, la suma de quince (15) salario mínimos legales mensuales vigentes

Por daño emergente futuro, el Ministerio de Defensa, Policía Nacional deberá proporcionarle a Yamileth Balanta Lucumí, lo necesario para superar las secuelas en el miembro inferior izquierdo en lo que tiene que ver con las esquirlas únicamente, y por tanto dispondrá de servicio médico, terapias y demás servicios que requiera⁴⁹.

Por Lucro cesante la suma de \$ **465.875**

CUARTO: Negar las demás pretensiones de la demanda.

QUINTO: Dar cumplimiento a esta Providencia en los términos del artículo 192 del Código de Procedimiento Administrativo y de lo Contencioso Administrativo.

SEXTO: Condenar en costas a la parte demandada. Por Secretaría efectúese la liquidación de rigor.

OCTAVO: Notifíquese la presente providencia en la forma establecida en el artículo 203 del CPACA y en el CGP, en lo pertinente.

NOVENO: Enviar copia de la presente providencia al Juzgado 4º Administrativo del Circuito de Popayán para lo que estime pertinente.

OCTAVO: En firme la presente providencia, por Secretaría liquidar los gastos del proceso, y enviar copias de la sentencia a la entidad condenada, según lo disponen los artículos 192 y 203 del CPACA.

CÓPIESE, NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE

La Jueza,

MARIA CLAUDIA VARONA ORTIZ

⁴⁹ Consejo de Estado Sala de lo Contencioso Administrativo Sección Tercera Consejero Ponente: Enrique Gil Botero. Bogotá, D. C., catorce (14) de septiembre de dos mil once (2011). Expediente: 19.031. Radicación: 05001232500019940002001. Actor: Antonio José Vigoya Giraldo y otros. Demandado: Nación – Ministerio de Defensa, Ejército Nacional –Asunto: Acción de reparación directa